

Antonio Antón

Crisis y estrategias

La actual crisis sanitaria, social, económica e institucional, derivada la pandemia del Covid-19 y sus respuestas institucionales y ciudadanas, han puesto en evidencia grandes problemas estructurales, socioeconómicos y políticos, así como graves consecuencias para las mayorías sociales. Estas se han acumulado al deterioro derivado de la anterior crisis socioeconómica de 2008 y las políticas regresivas de ajuste estructural y recortes sociales aplicadas desde 2010, cuyo impacto permanece. El leve crecimiento económico y del empleo de este lustro pasado apenas ha escondido la fragilidad de la economía y las políticas públicas que se han manifestado al encarar la actual crisis: precariedad laboral y de empleo, con la subordinación de la gente trabajadora al poder empresarial que impuso las anteriores reformas laborales, y debilitamiento de los derechos sociales, servicios públicos y prestaciones sociales.

Han aparecido en toda su crudeza las deficiencias de la protección social pública, sobre todo del sistema sanitario, pero también de los sistemas de cuidados, servicios sociales, pensiones y educativo. Junto con la fragilidad de nuestro aparato productivo y laboral, se han mostrado las insuficiencias de nuestro débil Estado de bienestar, recortado esta década pasada y, más en general, del conjunto de las administraciones públicas, con sus deficiencias coordinativas, inercias burocráticas y de insuficiente personal preparado, desbordadas a la hora de gestionar las medidas urgentes de emergencia social necesarias en lo inmediato ante la vulnerabilidad de amplios sectores.

Supone un fracaso histórico de las élites dirigentes del país, incapaces de implementar una suficiente modernización económica, más aún de la consolidación y los beneficios de ciertas oligarquías económico-financieras, ni de ofrecer una garantía de seguridad y bienestar para la población, con un Estado social avanzado y suficiente. Se ha manifestado un malestar de fondo en la sociedad por esa incertidumbre social y la impotencia gestora de las instituciones políticas y económicas. Se ha evidenciado la fragilidad del propio Estado, junto con la exigencia cívica de responsabilidades y una salida progresiva (y no regresiva). Esta situación se ha agudizado por la pandemia y la crisis subsiguiente, y ha coincidido con el cambio político del nuevo Gobierno de progreso. Todo ello constituye el campo del juego político y mediático de estos meses y los procesos legitimadores de cada actor sociopolítico e institucional.

Un balance positivo

El Ejecutivo de coalición, con las fuerzas sociales y políticas que le apoyan, ha tenido la responsabilidad de liderar la respuesta a esta aguda crisis sobrevenida. **El balance, aun con sus claroscuros, es moderadamente positivo que, en el contexto actual, supone un gran logro.** Ha reajustado las prioridades de su programa inicial de cambio progresista, aunque ha apuntado a sus tres ejes fundamentales.

Primero, el escudo social y las políticas sociales y de reversión de derechos sociolaborales, todavía limitadas, lentas y parciales, pero reales y concretas. Lo más significativo, junto con el aumento del salario mínimo (SMI), los ERTES como mecanismo inmediato para frenar la destrucción del empleo, proteger a varios millones de personas

trabajadoras y sostener el tejido empresarial, pero también en la aprobación e implementación del Ingreso mínimo vital (IMV), manifiestamente mejorable; además, el comienzo de la eliminación de aspectos de la regresiva reforma laboral y de la de pensiones del Gobierno de Rajoy, todavía con pasos insuficientes ante la dimensión de los recortes impuestos y la oposición fáctica de los poderes financieros y empresariales.

Segundo, la recuperación económica que, más allá de las urgentes medidas para paliar los efectos inmediatos de la crisis y la previsible aprobación de unos presupuestos generales más expansivos, sociales y progresivos, empezando ya a apuntar a lo importante a medio plazo: una modernización del aparato económico y las especializaciones productivas con una orientación verde y sostenible medioambientalmente y de avance tecnológico y digital, así como a una suficiencia fiscal propia justa, complementada con los fondos financieros europeos, fundamentales en el corto plazo. Este aspecto modernizador es el más ambiguo desde el punto de vista igualitario y de los reequilibrios de poder económico y político. Aparece consensuado en la superficialidad discursiva, pero está sometido a la pugna de intereses y la presión de distintos sectores económicos, sociales y políticos. Por tanto, está por ver el sentido modernizador y equitativo de su implementación práctica, así como la capacidad de gestión de las propias administraciones públicas y su relación con los mercados y el mundo empresarial. Y, en todo el proceso, analizar cómo queda la sociedad y el país en este mundo europeo y globalizado.

Tercero, la regulación de la pluralidad territorial, con la articulación dialogada del conflicto catalán, que ensanche la convivencia cívica, con un proyecto de país y un modelo de Estado más plural y democrático. Los obstáculos son enormes, pero es un desafío histórico para las fuerzas progresistas en España.

Pues bien, esos planes, cuya ejecución no está exenta de ambigüedades, tensiones, dificultades y limitaciones, han echado a andar. Se ha vencido el bloqueo de las derechas y otros poderes fácticos, se ha despejado la amenaza de impotencia institucional y división política entre las fuerzas progresistas, y se ha aclarado el horizonte de gobernabilidad para toda la legislatura. Se ha cumplido un año desde las elecciones generales y el acuerdo progresista de ambas izquierdas, *Partido Socialista* y *Unidas Podemos* y confluencias, sigue adelante. No hay alternativa democrática (tampoco fáctica) a este proceso de gobernabilidad con una mayoría parlamentaria y una orientación de progreso.

La fortaleza progresista y sus desafíos

Esta década ha evidenciado cambios significativos en el ámbito sociopolítico: la recomposición de fuerzas sociales y campos electorales e institucionales, con la crisis del bipartidismo; el fracaso de la alianza de gran centro; el reagrupamiento y reequilibrio interno de los dos bloques de izquierda (con unas relevantes fuerzas de cambio de progreso) y derecha (con fuerte presencia de la ultraderecha), y la persistencia del conglomerado de grupos nacionalistas.

En gran medida, de forma similar a otros países del sur europeo, **ha sido la articulación popular progresista, con su activación cívica y su reflejo político-institucional, la que ha desembocado, tras diversos altibajos, en el actual Gobierno de coalición, venciendo las inercias bipartidistas y la presión de las derechas.**

Ese proceso social y democrático de fondo ha condicionado la posibilidad de repetir la misma política de austeridad y la prepotencia autoritaria de las anteriores elites gobernantes y ha exigido un giro más expansionista e integrador de las políticas europeas. Ya estaba anunciado en el acuerdo programático del nuevo Gobierno progresista de principios de año: justicia social y laboral, modernización productiva y refuerzo institucional de una mayoría de progreso.

Son ejes alternativos que, ante la nueva realidad de crisis sobrevenida y recomposición política, están en proceso de reformulación a partir del diseño de los presupuestos generales, pendientes de su aprobación definitiva en el Congreso, probablemente para enero de 2021. Conviene, no obstante, establecer un horizonte a medio plazo, al menos para toda la legislatura y con la incertidumbre y la expectativa de continuidad en la siguiente tras un proyecto progresista de país, en el marco europeo, definido para siete años.

A ello habrá que añadir, por un lado, la crisis institucional y de modelo estatal derivado de la realidad plurinacional y territorial, en particular con el desafío soberanista catalán, así como de la progresiva deslegitimación de la Monarquía; y, por otro lado, el reaccionarismo de VOX que representa a un sector conservador significativo y condiciona la estrategia, la capacidad alternativa y la dinámica de las derechas, que tienen por objetivo el freno autoritario a un cambio de progreso.

De forma paralela, las fuerzas hegemónicas en la Unión Europea, lideradas por la Alemania de la demócratacristiana Merkel y con el apoyo del grueso de las derechas liberal-conservadoras, empezando por el francés Macron, han visto la necesidad de dar un cierto giro a la política económica y la construcción europea. Estaban cuestionadas por la deslegitimación social y democrática y el fracaso de las políticas de austeridad ante la anterior crisis, así como por el desafío de los grupos de extrema derecha y las tendencias disgregadoras de la Unión (en particular el Brexit). Y ante esos riesgos y para contenerlos, esas élites europeas han diseñado el actual plan de recuperación económica, reforzado los mecanismos comunitarios y emprendido una nueva relegitimación pública.

Las dos formaciones que componen el Gobierno progresista de coalición han dado, en menos de un año y en un contexto incómodo y grave, un paso decisivo para su unidad y el comienzo de la implementación de su programa. La estabilidad gubernamental, tras la aprobación presupuestaria con una suficiente mayoría parlamentaria, queda despejada para toda la legislatura.

Pero no todo está resuelto con vistas a los objetivos transformadores a medio plazo, las perspectivas de consolidación o no de esta dinámica de progreso y la confirmación o modificación de las estrategias y alianzas para la próxima legislatura. Hay que analizar las condiciones sociopolíticas y estructurales que facilitan una salida progresista o, bien, las tendencias hacia un continuismo centrista, una vez neutralizada la opción reaccionaria, al menos hasta las próximas elecciones generales.

La pugna estratégica

La pugna estratégica de las fuerzas progresistas con las derechas españolas (PP, C&E™s y VOX) es evidente. Los consensos de Estado o de un supuesto interÓs nacional compartido son difÁciles. Subyace la disputa por el tipo de proyecto de paÁs, el camino a recorrer y las fuerzas y alianzas disponibles para hegemonizarlo.

El giro retÁrico de Casado, el lÁder del *Partido Popular*, de distanciarse de la mociÁn de censura de VOX, apenas esconde su pretensiÁn hegemónica, su orientaciÁn neoliberal-conservadora y su reafirmaciÁn en la oposiciÁn frontal al Gobierno de coaliciÁn y su proyecto de reformas progresivas sociales, econÁmicas y polÁticas. No apunta al consenso en las polÁticas fundamentales, que considera beneficioso para asentar al Ejecutivo y su proyecto progresista, sino que se reafirma en la confrontaciÁn como medio de desgastarlo y preparar su alternancia gubernamental. Sus resultados de conseguir mayores apoyos sociales para su recambio institucional son dudosos y claramente perjudiciales para el desarrollo social y la convivencia democrÁtica. Aparece su interÁs partidista, y porÁa en el ventajismo polÁtico competitivo para hegemonizar el espacio de las derechas, ajeno a un camino institucional compartido en beneficio de la sociedad y el paÁs. Esa estrategia confrontativa por la recomposiciÁn representativa de su dominio dentro del viejo bipartidismo, pendiente todavÁa de sus responsabilidades por sus actuaciones corruptas y autoritarias, pierde legitimidad ciudadana.

Los vaivenes de *Ciudadanos* son irrelevantes por su escasa representatividad parlamentaria. Su tiempo ha pasado malgastado. Es difÁcil su recuperaciÁn para los dos ejes estratÁgicos que ha ensayado en estos aÁos: su estatus preponderante en el centro derecha y su papel fundamental para una operaciÁn de gran centro con el *Partido Socialista*. Su funciÁn es doble: por un lado, servir de forma subordinada a la gobernabilidad de la derecha bajo el liderazgo del Partido Popular y la compaÁÃ±a de VOX en varias Comunidades AutÁnomas, significativamente las de Madrid y AndalucÁa; por otro lado, ofrecer un pretexto a algunos sectores socialistas y grupos de poder para implementar la moderaciÁn gubernamental y el cambio de alianzas progresistas a medio plazo, con unos supuestos resultados electorales favorables para otra operaciÁn gran centro, de continuismo neoliberal y centralismo institucional.

Es la estrategia centrista conocida: el freno a la dinÁmica de progreso, la marginaciÁn de las fuerzas del cambio y el enquistamiento del conflicto territorial. Es la salida continuista ya ensayada y fracasada en el lustro pasado, pero no por ello querida por sectores poderosos y resucitada a cada paso. Para su implementaciÁn requieren un respaldo institucional mÁs amplio y decisivo para *Ciudadanos* y, sobre todo, la connivencia de sectores socialistas y sus apoyos mediÁticos, econÁmicos e institucionales que pudiesen diluir la opciÁn progresista del sanchismo. Pero la actual direcciÁn socialista estÁ obligada, por su sentido de la realidad ya demostrado la misma noche de las elecciones generales, a persistir en la Ánica

opción para hegemonizar el poder gubernamental: el acuerdo de progreso pactado con *Unidas Podemos* y sus convergencias, con el apoyo parlamentario de grupos nacionalistas.

Esa realidad representativa y fáctica que refleja el nuevo equilibrio producido tras una década de cambios en las relaciones sociales y culturales tiene unas bases sólidas. Más allá del análisis de los comportamientos de las élites políticas, los mecanismos institucionales o las estructuras económicas y de poder, es imprescindible explicar las tendencias sociales y electorales de fondo, tal como priorizo desde la sociología política. Desde este punto de vista, hace un año, en torno a los resultados de las elecciones generales y con datos del CIS, expuse una amplia investigación sobre las [características sociodemográficas](#) y de [cultura política](#) de los electorados progresistas en sus dos versiones, del *Partido Socialista* y de *Unidas Podemos* y confluencias. Pues bien, considerando diferentes estudios demoscópicos, no se han modificado los grandes rasgos y tendencias de esas bases sociales que, junto con las izquierdas nacionalistas, son claramente superiores a los electorados de las derechas.

No obstante, los tres grandes campos socio-electorales están sometidos a la actividad permanente desarrollada por los diversos actores, según sus intereses y estrategias, y está condicionada por la evolución general del marco socioeconómico, sociopolítico y cultural, así como por la gestión política y la activación cívica de los dos próximos años, hasta la antesala del próximo ciclo electoral de 2023.

La solución la tiene el campo progresista

De momento, se impone ese equilibrio de fuerzas y su reflejo parlamentario e institucional, aunque esa realidad sea constantemente impugnada por las pretensiones de muchos sectores poderosos de dentro y fuera de nuestras fronteras. Su acariciada expectativa es una nueva recomposición del tablero político-institucional, más acorde con las fuerzas dominantes europeas, y tras los deseados desplazamientos electorales. Tiene un doble componente: por un lado, achicamiento del espacio del cambio de progreso, con mayor debilitamiento de *Unidas Podemos* y sus aliados, acelerando su aislamiento y neutralizando los distintos nacionalismos periféricos; por otro lado, ensanchamiento del campo centrista autónomo del *Partido Popular* que, junto con el estancamiento del *Partido Socialista*, conllevará un cambio de pareja aliada con *Ciudadanos*, sin descartar (si sumasen, cosa muy improbable) un Gobierno de derechas con (aparición de) menor dependencia de *VOX*. Todo ello para condicionar el papel central y articulador del *Partido Socialista* para involucrarlo hacia esa ansiada gestión centrista.

La solución está en el propio campo progresista, en la firmeza de su rumbo y los apoyos sociales a consolidar. En ese sentido, es necesario valorar los puntos compartidos de la alianza gubernamental, así como sus diferencias políticas para definir mejor y darle solidez a un proyecto compartido de progreso.

El riesgo y el forcejeo más o menos soterrado desde diversos grupos de poder es respecto de una solución continuista o centrista con una posición subordinada de las tendencias de izquierda, no solo de las fuerzas del cambio sino del propio sanchismo sin un perfil programático consecuente.

Todo ello, bajo los equilibrios hegemonizados por las fuerzas liberal-conservadoras dominantes en la Unión Europea con una doble tarea: por una parte, la contención de las ultraderechas y

las dinámicas más disgregadoras y autoritarias, y, por otra parte, la subordinación de la socialdemocracia europea y la neutralización de las tendencias a su izquierda. El actual giro más expansionista e integrador de la política económica de la Unión Europea está derivado del fracaso histórico de la anterior estrategia de austeridad, la amplia deslegitimación de los élites gobernantes y los riesgos de disgregación interna, así como por su pérdida de peso geopolítico y económico mundial que pretenden reforzar.

Lo que persigue el nuevo proyecto europeo es relegitimar y consolidar los núcleos de poder en torno a las élites dirigentes de Alemania como fuerza dominante, acompañadas, por un lado, de las de Francia y, por otro lado, las de los países ricos (frugales) con presencia de partidos conservadores, liberales y socialdemócratas. Quedan en un círculo más periférico los pueblos y países del Sur europeo, como España, con mayores debilidades estructurales y unas élites subordinadas y adaptativas a esa trayectoria.

El desafío para las izquierdas y grupos progresistas es el desarrollo de una opción política de progreso, un proyecto modernizador y democrático de países y un modelo más social y solidario que pudiesen condicionar el renovado e insuficiente proyecto de construcción europea del bloque liberal-conservador dominante y el riesgo de su consolidación a largo plazo, junto con la presión ultraconservadora, autoritaria, xenófoba y antisocial de la derecha extrema.

La reforma progresista de países

La crispación y la polarización política promovida por las derechas en España (principalmente PP y VOX) pretenden eludir sus responsabilidades históricas e institucionales y aprovechar la confusión y la inseguridad existentes para traspasarlas al nuevo Gobierno progresista de coalición y derribarlo, cosa que se va demostrando ilusa. **Su estrategia destructiva está agotada y tiene poco recorrido para la gobernabilidad, una vez aprobados los presupuestos generales y asegurar una mayoría parlamentaria de progreso.**

Sin embargo, afecta a la vida social, favoreciendo la intranquilidad y la desconfianza en la gestión institucional actual, con el objetivo de crear una alternancia gubernamental cueste lo que cueste, es decir, con pocos escrúpulos democráticos y ningún aprecio por el bienestar social y la convivencia de la ciudadanía. Ello les encamina a una dinámica autoritaria y ultraconservadora, con el abuso de manipulaciones discursivas, que apenas pueden disimular con algunas llamadas retóricas a la moderación.

Sus reservas ideológicas y socioculturales (reaccionarismo autoritario, espagnolismo excluyente y antipluralista, conservadurismo cultural y machista, segregación xenófoba antimigrante, elitismo neoliberal antipopular) son significativas todavía en el ámbito mediático e institucional; y no son desdeñables sus apoyos sociales y electorales. Pero a pesar de la reafirmación ultraderechista de VOX, sus bases sociales se están agotando lo suficiente para impedir que consigan mayorías ciudadanas y capacidad para ofrecer una referencia modernizadora ganadora. Es el dilema del *Partido Popular*, dependiente de su estrecho posibilismo para ser alternativa gubernamental (al igual que en varias Comunidades Autónomas) de la mano de VOX y contemporizar con su proyecto, pero incapaz de ensanchar una base electoral centrista.

La derrota de Trump, la contenci3n de las ultraderechas en los pa3ses europeos y la hegemon3a liberal-moderada del eje Merkel-Macron no les ayuda en su estrategia de confrontaci3n pol3tica visceral, acuerdo con la ultraderecha y generaci3n de miedo y segregaci3n en la sociedad. **Esa estrategia reaccionaria, conservadora y autoritaria no tiene futuro pol3tico-institucional, aunque hay que frenarla y derrotarla por su car3cter destructivo en la sociedad.**

Se abre una dislocaci3n entre grupos de poder (econ3mico-financiero, aparatos del estado, control medi3tico-ideol3gico), con la pugna en su interior, y representaci3n pol3tica entre las distintas derechas (tambi3n nacionalistas). Las pol3ticas de Estado o el llamado inter3s general, interpretados como sin3nimo de su gesti3n pol3tica, los consideran subordinados a la b3squeda de la hegemon3a pol3tica del bloque derechista estatal, con la pugna por el papel determinante en el liderazgo de la derecha, frente a un bloque progresista, cada vez m3is compacto.

No obstante, esos grupos de poder, econ3mico e institucional, tienen esa responsabilidad hist3rica y, dif3cilmente, van a poder encabezar la imprescindible modernizaci3n econ3mica, el refuerzo del Estado social y la democratizaci3n pol3tica que la sociedad necesita.

Adem3s, hay que valorar su composici3n. Un dato significativo es que la mayor3a del capital de las grandes empresas del IBEX 35 (por no hablar de grandes empresas industriales, principalmente de autom3vil, totalmente en manos extranjeras), as3 como la mayor parte de su actividad econ3mica, inversora y comercial se desarrolla fuera de nuestras fronteras. Es decir, el grueso de las grandes empresas, concentradas en las finanzas, la energ3a, la construcci3n y algunos servicios, no van a primar un supuesto inter3s nacional de modernizaci3n, es dif3cil que sean patriotas. La mayor3a est3 inserta en la globalizaci3n econ3mica y financiera, depende m3is de sus intereses, beneficios y proyectos externos o globales, no de pa3s, y arrastra por su papel preponderante a gran parte de la econom3a y el mundo empresarial. No se puede confiar mucho en ello. **Supone que hay que reforzar la capacidad del propio Estado y su gesti3n reguladora, dirigente e intervencionista para que, con suficiente legitimidad social, sea factor de impulso transformador.**

Pero ah3 hemos topado, con el dise3o el propio plan modernizador que conlleva l3neas rojas para esos grupos de poder, claramente expresadas por la patronal de la CEOE, y que hay que abordar: ensanchamiento progresivo de la base fiscal del Estado; fortalecimiento de los derechos sociales y laborales y la protecci3n p3blica, y protagonismo de las fuerzas de izquierda y movimientos sociales c3vicos.

El conflicto de fondo no es menor. Por ejemplo, simplemente con una homologaci3n de la presi3n fiscal similar a la europea (siete puntos del PIB, m3is de 70.000 millones de euros anuales), en dos a3os se podr3a conseguir similar volumen al recibido por los fondos europeos (140.000 millones, menos si se descuenta nuestra aportaci3n), tan necesarios y alabados como la palanca modernizadora imprescindible, y que la mitad habr3 que devolver. O sea, aparte de la justicia social y con efectos a medio plazo, una reforma fiscal homologable a los principales y m3is avanzados pa3ses europeos y en igualdad con ellos, reportar3a una capacidad autonoma como pa3s para implementar los dos ejes imprescindibles: el proceso modernizador, econ3mico y de empleo; el refuerzo del nuestro d3bil Estado de bienestar y los correspondientes servicios

p blicos, prestaciones sociales e inversi3n educativa, investigadora y cultural. Todo ello con criterios igualitarios: sociales, culturales,  tnico-nacionales, territoriales, medioambientales y de g nero.

Pero, claro, frente a las derechas y esos grupos de poder, con su continuismo adaptativo, su beneficio corporativo y cortoplacista y su inercia conservadora-autoritaria, esta orientaci3n progresista son palabras mayores: necesitan el fortalecimiento y la determinaci3n de las izquierdas, con un bloque com3n progresista, y dentro de  l con mayor peso pol tico que el actual de las fuerzas del cambio de progreso. Esos son los c lculos estrat gicos de los distintos actores y  lites, para activar o desactivar.

Llevamos una d cada de deslegitimaci3n y recomposici3n de la clase pol tica (bipartidista) anterior. El proceso contin a y el estatus actual es modificable. Todas las persistentes estrategias para evitar una salida progresista y neutralizar las fuerzas del cambio de progreso no han conseguido sus objetivos. Pero no paran en el empe o para cerrar esa oportunidad costosamente formada por una d cada de activaci3n popular progresista y de izquierdas, abanderada tras la justicia social y la democracia.

La opci3n centrista, bajo hegemon a socialista, en sus diversas versiones, tambi n ha fracasado en las urnas, es decir, bajo la voluntad mayoritaria de la ciudadan a. Los  ltimos intentos de reavivarla tras la pandemia, con fuertes apoyos pol tico-econ3micos, para separar al *Partido Socialista* de su alianza con *Unidas Podemos* y nacionalistas vascos y catalanes, han fracasado. La ruptura del Gobierno de coalici3n y de la mayor a parlamentaria de la investidura no ha tenido  xito y no tienen repuesto. El proyecto de fondo, una modernizaci3n econ3mica y verde con justicia social y la democratizaci3n institucional y la regulaci3n territorial son ineludibles. Es el viejo y nuevo reto para el actual Ejecutivo y el conjunto de fuerzas sociales y pol ticas progresistas.

La aventura ultraderechista de condicionar el mapa pol tico-institucional, con todo su potencial destructivo y de crispaci3n, no garantiza una alternativa gubernamental de las derechas y menos un proyecto de pa s democr tico. La v a de un autoritarismo reaccionario-conservador (neofranquista) est  fracasada.

Por otro lado, aunque lejos de la ilusi3n de una transformaci3n r pida y profunda, no se ha cerrado la posibilidad de un giro social hacia la izquierda, aunque sea limitado. lento y consensuado entre las izquierdas (incluidas las nacionalistas) y otros grupos sociales y pol ticos de progreso. Ello afecta a cierta desestabilizaci3n de los privilegios institucionales y estructurales y de los equilibrios de los propios grupos de poder y las derechas. Eso ser a ya un gran paso hacia la transformaci3n de las din micas sociopol ticas, culturales y de las relaciones de poder: es el desaf o a medio plazo para un cambio sustantivo de progreso.

Es la perspectiva que temen esas fuerzas reaccionarias y que tienen que asumir: mantenerse en la oposici3n durante toda la legislatura, sin capacidad de influencia para impedir el grueso de las pol ticas p blicas de progreso y la consolidaci3n de su representaci3n pol tica e institucional. As , a trav s de la crispaci3n, expresan su impotencia para frenar una gesti3n progresista, aunque sea lenta y limitada. Y, adem s, manifiestan su incapacidad para impedir el fortalecimiento de una pol tica y una alianza de progreso m s firme, que se pueda prolongar a otra legislatura y abrir una din mica de cambio sustantivo en Espa a que, a su vez, condicione

el modelo de paÃs y el de la construcciÃ³n europea.

El riesgo es que la aplicaciÃ³n de solo medidas parciales muy insuficientes no frene la consolidaciÃ³n de todos los efectos negativos de las dinÃ¡micas estructurales desiguales y las polÃticas regresivas precedentes que siguen en vigor. El peligro es la generaciÃ³n de frustraciÃ³n social y desafecciÃ³n polÃtica hacia las izquierdas, vistas como temporizadoras o impotentes para impulsar un cambio satisfactorio para las mayorÃas populares, cuestiÃ³n mÃ¡s o menos manipulada y expandida por el poder establecido y las derechas que aparece en su guion demagÃ³gico.

Al mismo tiempo, resurge una y otra vez, la oportunidad para los poderosos de otra estrategia â€œcentristaâ€™™, para atraer al *Partido Socialista*, romper el Gobierno de coaliciÃ³n y aislar a *Unidas Podemos* y sus convergencias, considerado el factor de empuje del cambio. Pretenden representar los intereses de esos grupos de poder y defender el continuismo estratÃ©gico y similar polÃtica econÃ³mica y sociolaboral.

El presidente SÃ¡nchez y el sanchismo lo tuvo claro desde la misma noche electoral del 10-N: solo era posible una alianza de progreso de ambas formaciones con la cobertura de, al menos, parte de los nacionalismos perifÃ©ricos, vasco y catalÃ¡n. **Ello define los tres grandes retos entrelazados: justicia social y modernizaciÃ³n econÃ³mica, junto con la democratizaciÃ³n institucional, la regulaciÃ³n territorial y el modelo de Estado. Con otros dos desafÃos adicionales de gran valor social y cultural y, tambiÃ©n, estructural y de poder: la igualdad de gÃ©nero y la sostenibilidad medioambiental.**

Tal es la reforma que necesita este paÃs, cuyo futuro estÃ¡ abierto y con grandes dificultades, pero que depende en gran medida de la determinaciÃ³n y unidad del campo progresista.

Â

[Antonio AntÃ³n es Â Profesor de SociologÃa de la Universidad AutÃ³noma de Madrid y autor del blog Â <https://www.antonio-anton-uam.es>]

[@antonioantonUAM](#)

Â